

CINCUENTA AÑOS DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS (Editorial)

Francisco Gutiérrez Sanín

El entonces presidente estadounidense Richard Nixon declaró en 1971 la “guerra contra las drogas”. Desde entonces, han corrido —en el mundo y en Colombia— ríos de dinero y de sangre.

También de tinta. La simple magnitud del problema lo amerita. Es posible que ningún colombiano haya pasado en las últimas décadas una semana sin oír noticias acerca del narco y la lucha contra este. La guerra contra las drogas y la economía respectiva impactaron de una manera brutal a Colombia articulándose a los mercados legales, a la política, a la sociedad y a la cultura. Por supuesto, también interactuaron permanentemente con nuestras diversas violencias, así como con nuestra otra prolongadísima guerra globalizada: la contrainsurgente.

Este número especial está dedicado a los 50 años de la guerra contra las drogas y al efecto que su producción, su consumo y su represión han tenido sobre nuestra vida social. Es imposible, por lo que acabo de anotar, que cubra la multitud de problemas relevantes asociados a aquella. Tampoco lo pretende. Presenta, en cambio, varios enfoques nuevos, con importantes implicaciones analíticas y de políticas públicas.

Sin hacer plena justicia a cada uno de los ocho textos del dossier, podría decirse que se pueden clasificar en dos grandes categorías. Por una parte, están aquellos que se concentran en las transformaciones sociales —muy en particular, agrarias— relacionadas con la guerra contra las drogas; por la otra, los que reflexionan sobre las políticas públicas generadas por ellas. Esto, insisto, es un poco mecánico, pues los primeros tienen implicaciones de política y se refieren a dichas transformaciones, y los segundos, necesariamente, dialogan con las implicaciones sociales de los diseños institucionales. Sin embargo, como puerta de entrada provisional, la idea de los dos énfasis puede ser útil para orientarse acerca de las propuestas analíticas contenidas en el dossier.

Respecto de los artículos agrarios, María Clara Torres considera la compleja relación entre cultivos ilícitos en el Ariari, y muestra que su proliferación estuvo íntimamente relacionada con una modernización del sector arrocero que concentró drásticamente la tierra.

El proceso pasa, igualmente, por el relacionamiento de la guerra contra las drogas con el conflicto armado. Eso también resulta del texto de José Antonio Gutiérrez, cuyo foco de atención es Argelia, Cauca. La dinámica económica cocalera, argumenta Gutiérrez, no necesariamente fue “el combustible del conflicto”. El combustible para un nuevo ciclo de violencia en ese municipio, y en otros, podría ser, en cambio, el incumplimiento del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Gutiérrez-Sanín y Machuca, por su parte, se aventuran a considerar los impactos culturales de la coca sobre las sociedades rurales que la cultivan. ¿Será que generan únicamente “capital social negativo” o “narcocapitalismo”, como se ha planteado tantas veces?

El análisis de López, Peña y Triana sobre la relación entre campesinos, glifosato y jueces es la transición entre *énfasis agrarios* y *énfasis de política*. Las autoras muestran que los jueces han tendido a adoptar posiciones más favorables al glifosato cuando el Ejecutivo abraza sin empacho los términos de la guerra contra las drogas, y en cambio son más garantistas cuando el ejecutivo se muestra más flexible. Las potenciales implicaciones de política son grandes. Uprimny, a su vez, hace una consideración sobre diversas dimensiones de las políticas contra el narcotráfico mostrando las complejidades implícitas en un menú de opciones limitado, pero real. Ibarra y Rojas discuten el contenido de las estrategias contra el narcotráfico en el contexto del acuerdo de paz. Devia y Ortiz Morales hacen lo propio, pero desde una perspectiva comparada entre Perú y Colombia. Finalmente, Morales, Pinto, Rojas y Vásquez miran —signo de los tiempos— la política Ruta Futuro, de Iván Duque, desde la perspectiva del *big data*. Encuentran que hay una desarticulación entre el mensaje del gobierno y el de los medios de comunicación, pero en el proceso hallan diversos énfasis retóricos de la propuesta, a los que bien vale la pena prestar atención.

[4]

Una agenda de preguntas, una variedad de enfoques metodológicos, con numerosas conclusiones y énfasis nuevos, en torno a un problema sobre el que no podemos dejar de pensar.